

ITALIA
CRÓNICA LEGISLATIVA

Paulino César Pardo Prieto

Universidad de León

Leyes números 245 y 246, sobre normas para la regulación de las relaciones entre el Estado y la Unión Budista Italiana y entre el Estado y la Unión Hindúista Italiana “Sanatana Dharma Samgha”.

Los acuerdos (*intese*) suscritos por el Estado italiano con la Unión Budista Italiana [en adelante, UBI] y la Unión Hindúista Italiana “Sanatana Dharma Samgha” [en adelante, UII] en abril de 2007 han sido aprobados y promulgados finalmente como Ley, entrando en vigor con el inicio del año 2013.

Buena parte del articulado es común a unos textos por medio de los cuales la República italiana:

1º) Subraya:

- la autonomía que pertenece a las respectivas organizaciones y a sus integrantes conforme a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución italiana y, en particular, los derechos de libertad religiosa, expresión y reunión (artículos 2 y 3);
- el derecho de las uniones Budista e Hindúista a crear y gestionar establecimientos educativos (artículo 7);
- el derecho a nombrar ministros de culto, con los consiguientes efectos en el orden civil (artículo 8), particularmente en cuanto a su protección social y tratamiento fiscal de sus retribuciones (artículo 22 UBI y 23 UII).

2º) Articula el reconocimiento e inscripción de las entidades religiosas pertenecientes a ambas comunidades (artículos 11 a 14 UBI y 12 a 15 UII).

3º) Prevé un régimen tributario específico para las uniones y sus entidades (artículos 15 UBI y 16 UII) que incluye la exención de las publicaciones distribuidas en el interior de sus lugares de culto (artículos 18 UBI y 19 UII), así como la posibilidad de que las personas físicas en su declaración del IRPEF deduzcan las donaciones en favor de aquellas entidades –fijando inicialmente como límite la cantidad de 1032'91 €- (artículos 19 UBI y 20 UII) o destinen un 0'8% de la cuota de su impuesto al sostenimiento del culto o bien a intervenciones de carácter cultural, humanitario o asistencial dentro o fuera de Italia (artículos 20 UBI y 21 UII, entre otros).

4º) Garantiza el respeto hacia los edificios de culto y compromete su colaboración en la tutela de los respectivos bienes culturales (artículos 16 y 17 UBI, 17 y 18 UII).

5º) Reconoce el derecho de sus miembros a:

- objetar en conciencia a la prestación del servicio armado a sus integrantes, cuando así lo soliciten individualmente (artículo 4); - a recibir asistencia religiosa -previa demanda del interesado- en aquellas que tradicionalmente la doctrina italiana ha denominado “instituciones cerradas” y a participar, en tanto sea posible, en las ceremonias propias de sus respectivos cultos (artículo 5); - a recibir de personas designadas por una u otra comunidad instrucción sobre el hecho religioso y sus implicaciones -sin que ello suponga coste económico para el Estado- (artículo 6);

- a celebrar sus funerales y recibir sepultura conforme a los preceptos religiosos respectivos, en tanto sean compatibles con la normativa vigente (artículo 9 UBI y 10 UII);

- a conmemorar sus festividades religiosas (artículos 23 UBI y 25 UII).

Por otra parte, y únicamente en relación a la Unión Hindúista, la República italiana reconoce eficacia al matrimonio celebrado ante sus ministros de culto una vez inscrito en el Registro de estado civil (artículo 9); también en relación a esta comunidad, Italia se compromete a tomar en consideración las solicitudes que en materia

de adjudicación de frecuencias y espacios radiotelevisivos realice la Unión (artículo 26). Si el primer compromiso nos sitúa ante un derecho especial, este último, en cambio, no parece ir más allá de las previsiones que con carácter general establece el ordenamiento jurídico italiano.

Además, los acuerdos contienen diversas normas instrumentales que permiten, entre otros fines, especificar el alcance de las leyes mismas (artículos 26 UBI y 27 UII) o, por ejemplo, incorporar algunas definiciones a partir de las cuales facilitar la integración en el ordenamiento estatal de la respectiva actividad religiosa (artículos 10 UBI y 11 UII).

Desde un punto de vista meramente formal, baste añadir que ambas leyes incorporan como anexo el texto de los acuerdos suscritos en 2007 con las representaciones budista e hindúista. Por nuestra parte, hemos preferido no incluirlos dado que ya nos referimos a ellos dentro de esta sección de la *Revista laicidad y libertades. Escritos jurídicos*, concretamente, en el número 7.

Decreto del Presidente della República n.º. 82 de 26 de abril (GU). *Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.*

Mediante el Decreto núm. 82, de 26 de abril de 2013, vienen a modificarse los criterios y procedimientos previstos para la aplicación de la cuota del 0'8% del IRPF cuya gestión pertenece estrictamente al Estado. La norma, que ha entrado en vigor en septiembre de 2013, comenzará a aplicarse desde el uno de enero de 2014.

A partir de este Decreto, son retocadas algunas expresiones utilizadas en el Reglamento de 1998, de modo que, por ejemplo, “*las intervenciones extraordinarias por hambre*” serán a partir de ahora: “*exclusivamente intervenciones extraordinarias para la lucha contra el hambre en el mundo en caso de calamidades naturales y para la asistencia a los refugiados (...) de conformidad con las prioridades y programas definidos por las administraciones interesadas*”.

El montante de la cuota del impuesto obtenido, ha de ser ahora repartido en partes iguales en función de cada uno de los cuatro tipos de objetivos señalados y, si no llegara a invertirse la cantidad dispuesta para alguna de ellos, se dividirá el excedente entre los deficitarios. En cuanto a los bienes culturales, además, la cantidad que haya de destinarse habrá de ser repartida en partes iguales entre las cinco áreas geográficas (Noroeste, Noreste, Centro, Sur e Islas) en que a esta finalidad queda delimitado el país.

Podrán recibir aportaciones las Administraciones públicas, personas jurídicas y entidades públicas y privadas siempre que cumplan ciertos requisitos subjetivos y objetivos detallados en la nueva redacción que da el Decreto al antiguo artículo 3.

La norma, en fin, señala el proceso de nombramiento y las competencias de las comisiones encargadas de resolver acerca de la atribución de las cantidades económicas (art. 4), las condiciones que deben reunir las solicitudes presentadas (art. 5), la documentación a aportar al procedimiento (art. 7), así como las circunstancias en las que procederá la modificación o revocación de la ayuda (arts. 8 y 9).

ANEXO I

Legge 31 dicembre 2012, n. 245. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (GUn°14 del 17/1/2013).

(...)

Articolo 1. Rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana. 1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana (UBI) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Articolo 2. Autonomia dell'UBI. 1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.

Articolo 3. Liberta' religiosa. 1. La Repubblica riconosce all'UBI e agli organismi da essa rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. E' garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Articolo 4. Servizio militare. 1. La Repubblica, preso atto che l'UBI e' per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, che abbiano prestato servizio militare, sono

assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Articolo 5. Assistenza spirituale. 1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonche' da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sara' tenuto dall'UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi e' assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinche' possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'UBI trasmettera' apposito elenco alle autorita' competenti, dovra' essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UBI.

5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attivita' religiose della comunita' appartenente alla propria tradizione e geograficamente piu' vicina.

Articolo 6. Insegnamento religioso nelle scuole. 1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alle alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potesta' su di essi.

2. E' riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto

religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UBI con le medesime istituzioni.

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'UBI.

Articolo 7. Scuole ed istituti di educazione. 1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Articolo 8. Ministri di culto. 1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

4. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Articolo 9. Trattamento delle salme e dei cimiteri. 1. Agli appartenenti all'UBI è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.

2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Articolo 10. Attività di religione o di culto. 1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie

religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Articolo 11. Riconoscimento degli enti. 1. Ferma restando la personalità giuridica dell'UBI, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1999, della FPMT Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.

Articolo 12. Modalità per il riconoscimento. 1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 10.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. L'UBI e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.

Articolo 13. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 1. L'UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi

agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non già iscritti.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 14. Mutamenti degli enti religiosi. 1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UBI.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UBI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 15. Regime tributario dell'UBI. 1. Agli effetti tributari, l'UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. L'UBI e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Articolo 16. Tutela degli edifici di culto. 1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UBI.

2. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

Articolo 17. Tutela dei beni culturali. 1. La Repubblica e l'UBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali facenti parte del patrimonio dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati.

Articolo 18. Pubblicazioni. 1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 16 e delle loro pertinenze, nonche' la raccolta di offerte nei predetti luoghi sono effettuate senza autorizzazione, ne' ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Articolo 19. Contributi e deduzione agli effetti IRPEF. 1. La Repubblica prende atto che l'UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attivita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 20. Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF. 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UBI concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonche' assistenziali e di sostegno al culto.

2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UBI, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione all'UBI stessa.

Articolo 21. Commissione paritetica. 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'UBI.

Articolo 22. Assegni corrisposti ai ministri di culto. 1. Gli assegni corrisposti dall'UBI e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonche' al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 23. Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite. 1. A cura dell'UBI sono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 19 e 20 e l'UBI ne diffonde adeguata informazione.

2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto di cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 20 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 19 e 20.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 24. Festa religiosa buddhista. 1. La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Articolo 25. Norme di attuazione. 1. Le autorità competenti, nell'adottare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UBI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 26. Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori. 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all'UBI a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tale fine l'UBI è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 27. Ulteriori intese. 1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'intesa entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora nel frattempo una delle parti ravvisi l'opportunità di modifiche al testo dell'intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine.

2. Alle modifiche previste dal comma 1 si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UBI con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 28. Copertura finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 130.000 per l'anno 2013 e in euro 70.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(...)

Legge 31 dicembre 2012, n. 246. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (GU n. 14 del 17/1/2013).

(...)

Articolo 1 .

Rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha. 1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Articolo 2. Autonomia dell'UII. 1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'UII, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta' garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto induista vedico, puranico e agamico, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Articolo 3. Libertà religiosa. 1. La Repubblica riconosce all'UII e agli organismi da essa rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

2. E' garantita all'UII, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. E' riconosciuto all'UII e ai suoi appartenenti il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Articolo 4. Servizio militare. 1. La Repubblica, preso atto che l'UII e' per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Articolo 5. Assistenza spirituale. 1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Apposito elenco sarà tenuto dall'UII e trasmesso alle competenti amministrazioni.

2. Gli interessati e i loro congiunti devono fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto di cui al comma 1 e gli assistenti spirituali richiesti. A essi deve essere assicurato l'accesso alle strutture di cui al comma 1 senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di culto, di cui l'UII trasmette apposito elenco alle autorità competenti, deve essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UII.

5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Articolo 6. Insegnamento religioso nelle scuole. 1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione induista rappresentata dall'UII.

2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale

diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi.

3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalita' che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.

4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'UII il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita' si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalita' concordate dall'UII con le medesime istituzioni.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4 sono a carico dell'UII.

Articolo 7. Scuole ed istituti di educazione. 1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

Articolo 8. Ministri di culto. 1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell'articolo 26 dello statuto, allegato al testo dell'intesa, e' certificata dall'UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.

2. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.

3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.

4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Articolo 9. Matrimonio. 1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'UII aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l'ordinamento induista e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Articolo 10. Trattamento delle salme e cimiteri. 1. Agli appartenenti all'UII e' assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformita' alle norme vigenti in materia.

2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Articolo 11. Attivita' di religione o di culto. 1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri - Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra -, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;

b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Articolo 12. Riconoscimento degli enti. 1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'UII, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, il riconoscimento della personalita' giuridica ad altri centri ed organismi religiosi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo dell'UII.

Articolo 13. Modalita' per il riconoscimento. 1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza.

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione prodotta dall'UII.

3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 11.

4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno.
5. L'UII e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.

Articolo 14. Iscrizione nel registro

delle persone giuridiche. 1. L'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Decorso tale termine, l'UII puo' concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Articolo 15. Mutamenti degli enti religiosi. 1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UII e degli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso induista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo puo' essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UII.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'UII determina la cessazione con provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'UII, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 16. Regime tributario dell'UII. 1. Agli effetti tributari, l'UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. L'UII e gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Articolo 17. Tutela degli edifici di culto. 1. Gli edifici aperti al culto pubblico induista, di cui l'UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UII.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1 senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.

Articolo 18. Tutela dei beni culturali. 1. La Repubblica e l'UII si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali facenti parte del patrimonio dell'UII e degli organismi da essa rappresentati.

Articolo 19. Pubblicazioni. 1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UII, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'articolo 17 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Articolo 20. Contributi e deduzione agli effetti IRPEF. 1. La Repubblica prende atto che l'UII si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UII e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).

3. Le modalita' per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 21. Ripartizione della quota dell'otto per mille

del gettito IRPEF. 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UII concorre, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi.

2. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'UII dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme alle stesse finalita' di cui al comma 1.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UII entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione all'UII stessa.

Articolo 22. Commissione paritetica. 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 20 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 21, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'UII.

Articolo 23. Assegni corrisposti ai ministri di culto. 1. Gli assegni corrisposti dall'UII e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'UII e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonche' al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 24. Rendiconto della effettiva utilizzazione

delle somme percepite. 1. A cura dell'UII vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 20 e 21 e l'UII ne diffonde adeguata informazione.

2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare:

- a) il numero dei ministri di culto di cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata un'integrazione;
- b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
- c) gli interventi operati per altre finalita' previste dagli articoli 20 e 21.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 25. Festa religiosa induista. 1. La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indu' «Dipavali» che rappresenta, tra le feste dedicate alle diverse divinita' e seguite dalle relative tradizioni, la Vittoria della Luce sull'Oscurita' (viene celebrata il giorno di luna nuova - amavasja - tra la seconda meta' del mese di ottobre e la prima meta' del mese di novembre). Tale diritto e' esercitato nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festivitа' di cui al comma 1 e' comunicata dall'UII al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 26. Emittenti radiotelevisive. 1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertа' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dall'UII o da enti facenti parte della confessione dell'UII, operanti in ambito locale,

relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione e un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' della disciplina del settore.

Articolo 27. Norme di attuazione. 1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UII e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 28. Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori. 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all'UII a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'UII e' tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.

3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 29. Ulteriori intese. 1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove prima del suddetto termine una delle parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine.

2. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'UII con lo Stato, sono promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 30. Copertura finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 22.000 per l'anno 2013 e in euro

12.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(...)

ANEXO II

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82 (GU n°.166 del 17/7/2013). Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

(...)

Articolo 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono appostate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «gli interventi straordinari per fame» a: «beni culturali.», sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamita' naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le prioritá ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonchè alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli interventi in caso di calamita' naturali sono diretti all'attivitá di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumita' da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonchè al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purchè privi di mezzi di sussistenza e ospitalita' in Italia.»;

e) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice.»;

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere coerenti con gli indirizzi e le prioritá eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

g) al comma 6 le parole: «per tale ragione» sono soppresse;

h) dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere eseguiti sul territorio italiano.».

2. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: «Art. 2-bis (Criteri di ripartizione). - 1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita di regola in considerazione delle finalita' perseguite dalla legge in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o piu' delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.

3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto della natura straordinaria, dell'esigenza di tendenziale concentrazione, della rilevanza e della qualita' degli interventi.

4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).

5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto della natura straordinaria, della necessità e dell'urgenza dei medesimi.

In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e da conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.

6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.

7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le quattro tipologie di intervento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonché i risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari.

8. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.».

Articolo 2 Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Requisiti soggettivi). - 1. Possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro.

2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:

a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni;

c) agire in base a uno Statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2; d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;

g) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;

h) non avere riportato condanna, ancorchè non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione.

3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalita' dello Statuto allegato in copia; quanto alla lettera g) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacita' finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non puo' essere accolta, se non è conforme allo schema di cui all'Allegato A o se la documentazione allegata è mancante o incompleta.».

Articolo 3 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilità'.

2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda è improcedibile.».

Articolo 4 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Schema del piano di ripartizione). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche procede alla valutazione delle singole iniziative.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da quattro apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni, lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis.».

Articolo 5 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente: «Art. 6 (Modalità di presentazione della domanda). - 1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformità al modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

Alle domande devono essere allegata la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla

domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

2. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: «Art. 6-bis (Cause di esclusione). - 1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:

- a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2;
- b) relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.».

Articolo 6 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Determinazione preliminare e finale). - 1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema è corredato dalla relativa documentazione.

2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro quindici giorni.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.».

Articolo 7 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente: «Art. 8 (Erogazione dei fondi). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di:

a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;

b) indicare le modalita' da seguire per il versamento dell'importo;

c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne da' comunicazione ai Ministeri competenti per materia, per le finalita' di cui ai commi 5 e 6.

4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, è corrisposta l'intera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, è corrisposto un importo pari a 30 mila euro ovvero alla meta' del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori di importo pari ad almeno la meta' della quota di contributo erogata; i beneficiari a tale fine presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal

responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.

5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di quattro apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia.

Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. I componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non possono essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione alle Commissioni, di cui al presente comma, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro centottanta giorni, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. Per

gli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero per le opere relative a interventi per calamita' naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di regolare esecuzione e dalla relazione sul conto finale.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.».

Articolo 8 Modifiche all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

1. L'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente: «Art. 8-bis (Revoca del conferimento). - 1. La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di:

a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3;

b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;

c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'Allegato B;

d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato.

2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa per non più di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5.

3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui

all'articolo 8, comma 5, puo' essere anche parziale e comunque non inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso.

4. In caso di revoca, l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.».

Articolo 9 Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

1. L'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente: «Art. 8-ter (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei risparmi di spesa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2.

Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica originaria.

2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perchè necessari e urgenti ovvero perchè comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri puo' essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario.

Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2.

I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma 5.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.

5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.».

Articolo 10 Modifiche agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

1. Gli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono sostituiti dagli allegati A e B al presente decreto.

Articolo 11 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(...)

